

**SÍNTESIS DEL CASO:** El Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño presentó demanda ejecutiva contra la Compañía de Seguros CÓNDROR S.A. El Tribunal libró mandamiento de pago y dictó sentencia en la que declara no probadas las excepciones y ordena continuar con el proceso. El actor apeló la sentencia y solicita se revoque ante la excepción de mérito que hace consistir en la inexistencia del título ejecutivo complejo.

**CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / PROCESO EJECUTIVO CONTRA COMPAÑÍA DE SEGUROS / TOMA DE POSESIÓN CON FINES DE LIQUIDACIÓN / LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO**

**Problema jurídico 1:** ¿Al operar la terminación automática de un contrato de seguro de cumplimiento, por disposición legal especial, desaparece con ello el título ejecutivo complejo que da origen y permite la ejecución? SI

[L]a Sala encuentra que para resolver la impugnación debe realizarse un análisis sobre existencia del título ejecutivo complejo con el cual se pretende la ejecución. (...) con posterioridad a la Sentencia de primera instancia, ha tenido lugar un número considerable de hechos sobrevinientes consistentes en la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios; la liquidación forzosa administrativa y la terminación de la existencia legal de la Compañía de Seguros (...), que sin lugar a dudas han tenido un efecto directo sobre el proceso de la referencia (...) [ejecutivo contractual] (...). [D]e la mano de la suspensión de los procesos de ejecución, de la obligación de decretar de oficio la nulidad de las actuaciones surtidas en contravención de esta obligación, procede, de igual manera, por disposición legal especial, la terminación automática de los contratos de seguro en un término de dos meses como regla general, y de seis meses para los contratos de seguros de cumplimiento, como es el caso del contrato de seguro que en el proceso de la referencia conformaba el título ejecutivo que dio origen al proceso ejecutivo. (...) Advierte la Sala que al operar la terminación automática por disposición legal especial de un contrato de seguro de cumplimiento, desaparece con ello el título ejecutivo complejo que da origen y permite la ejecución.

**FUENTE FORMAL:** ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO - ARTÍCULO 117 LITERAL D / DECRETO 2555 DEL 2010 - ARTÍCULO 9.1.3.1.1 / LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 20

**LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / TOMA DE POSESIÓN CON FINES DE LIQUIDACIÓN / COMPAÑÍA DE SEGUROS / ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO / PROCESO LIQUIDATORIO / OBLIGACIONES DEL ACREEDOR**

**Problema Jurídico 2:** ¿Debe el acreedor presentar su reclamación dentro de un proceso de liquidación forzosa administrativa contra su deudor, en un plazo determinado?

Durante el desarrollo del proceso de liquidación forzosa administrativa, [...] los interesados debieron presentar sus reclamaciones dentro del término establecido para ello [...]; no obstante, (...), la demandante no concurrió a presentar su

correspondiente reclamación. [...] Con posterioridad a la declaratoria de liquidación forzosa administrativa, (...), se declaró la terminación de la existencia legal de (...) Compañía de Seguros Generales, acto que fue igualmente publicado en un diario de amplia circulación nacional. [...] Se observa entonces que, no obstante que se realizaron los emplazamientos respectivos contemplados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 2555 del 2010, la demandante en el presente proceso ejecutivo no cumplió su carga de acudir al proceso de liquidación para perseguir su acreencia. [...] De conformidad con la norma especial, Decreto 2555 de 2010, vencido el término para presentar las reclamaciones, los interesados tenían un término adicional de 5 días hábiles para objetar las reclamaciones presentadas. No obstante, no obra en el expediente que, en alguna de las oportunidades previstas por las normas especiales, la ejecutante, frente a los múltiples emplazamientos que tuvieron lugar, haya actuado conforme a sus deberes y cargas de actuación.

**FUENTE FORMAL:** ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO / DECRETO 2555 DE 2010

**PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES - SOCIEDAD LIQUIDADADA  
EXISTENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA / APLICACIÓN DE LAS COSTAS  
PROCESALES / COSTAS PROCESALES**

**Problema Jurídico 3:** ¿Procede o no condenar en costas a la parte vencida cuando se decretarían en favor de una persona jurídica frente a la cual se ha declarado la terminación de su existencia legal?

El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 171, señala que el juez podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso en los términos del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, la condena en costas en el Código de Procedimiento Civil está contenida, de manera general, en su artículo 392, que señala que habrá lugar a condenar en costas a la parte vencida cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Sobre los procesos ejecutivos el Estatuto Procesal Civil referido contempla, además, dos disposiciones puntuales sobre la condena en costas al ejecutado (artículo 507) o al ejecutante (artículo 510), de acuerdo con la parte que ha sido vencida en el proceso. Ahora, si bien las disposiciones anteriores indicarían una eventual condena en costas a la parte vencida, la Sala se abstendrá de hacerlo pues en el caso en estudio estas se decretarían en favor de una persona jurídica frente a la cual se ha declarado la terminación de su existencia legal, razón que, de igual manera, llevará a la Sala a revocar la condena en costas de primera instancia a cargo del demandado.

**FUENTE FORMAL:** CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 171 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 392 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 507 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 510

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCIÓN TERCERA**

**SUBSECCIÓN B**

**Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA**

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

**Radicación número: 25000-23-26-000-2002-01613-01(28920)A**

**Actor: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO**

**Demandado: SEGUROS CÓNDOR S.A.**

**Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – EJECUTIVO**

**TEMAS:** CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Ejecución de las pólizas de garantía en contratos estatales / PROCESO EJECUTIVO – Requisitos del título ejecutivo / TÍTULO EJECUTIVO – Documentos que conforman el título ejecutivo complejo.

**SÍNTESIS DEL CASO:** El Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño presentó demanda ejecutiva contra la Compañía de Seguros CÓNDOR S.A. El Tribunal libró mandamiento de pago y dictó sentencia en la que declara no probadas las excepciones y ordena continuar con el proceso. El actor apeló la sentencia y solicita se revoque ante la excepción de mérito que hace consistir en la inexistencia del título ejecutivo complejo.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de octubre de 2003, mediante la cual se resolvió:

- “1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.*
- “2. Seguir adelante con la ejecución.*
- “3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, el ejecutante deberá presentar la liquidación específica del capital y de los intereses, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago.*
- “4. Con condena en costas a cargo del demandado”.*

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones

## **1. ANTECEDENTES**

Contenido: 1.1. La demanda y el trámite de primera instancia – 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

### **1.1. La demanda y el trámite de primera instancia**

1. El 2 de agosto de 2002 el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, a través de apoderado judicial, presentó **demanda ejecutiva** en contra de la Compañía de Seguros Generales CÓNDR S.A., con el objeto de que se librara mandamiento de pago contra la demandada, en los términos de la Resolución 06 de 2000. La parte actora solicitó las siguientes declaraciones, (se transcribe):

**“PRIMERA.**- Como se trata de obligación de una suma de dinero, solicito muy respetuosamente libre mandamiento de pago contra la **CÓNDR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CÓNDR S.A.**, con NIT 08903004658 a favor del Distrito Capital de Bogotá – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO como consta en la Resolución N° 06 de 2000, por las siguientes sumas de dinero:

- “Pago de dinero efectivo por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO M/CTE. (\$49.648.578.71).
- “Por la actualización de la anterior cuantía en los términos del artículo 4º numeral 8 de la Ley 80 de 1993.

**“SEGUNDA.**- Se condene al pago de los intereses moratorios sobre el capital actualizado, en una tasa del doble de los intereses legales y ajustados a lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria según certificado de intereses bancarios expedido el 2 de julio de 2002, desde la ejecutoria de la resolución N° 06 de 2000, hasta la cancelación definitiva.

**“TERCERA.**- Se condene a la demandada al pago de las costas que se causen con la presente acción ejecutiva.

**“CUARTA.**- Las demás declaraciones y pagos que resultaren de la presente demanda”.

En la **demanda** la parte actora narró los siguientes **hechos**:

2. El Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, a través de su representante legal, el Alcalde Local, suscribió el contrato de obra pública No. 36 de 29 de diciembre de 1997 con el consorcio Raúl Rojas Borbón y Fabio Urrea Uyabán, por valor \$126'810.138,00, cuyo objeto era la construcción del coliseo en la sede del colegio distrital Guillermo León Valencia.

3. Como garantía del contrato el contratista constituyó la póliza de seguro N° 7191811 expedida por CÓNDR S.A. Compañía de Seguros Generales, para

amparar los riesgos de: buen y correcto manejo del anticipo; cumplimiento del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad.

4. Según la demanda, el interventor y supervisor designados tomaron posesión de la obra ante su abandono, lo que ocurrió el 23 de noviembre de 1998.

5. Mediante la Resolución No. 1 de 21 de enero de 2000 el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño liquidó unilateralmente el contrato de obra 36 de 1997 y, en su artículo 3º, se dispuso hacer efectiva la garantía única.

6. Contra el acto administrativo de liquidación unilateral el contratista interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño en los siguientes términos (se transcribe): *“Acéptese la petición de la compañía EL CÓNDOR S.A. en el sentido de pagar el riesgo asegurado con la continuación de la ejecución de la obra para culminarla y de esa forma dar cumplimiento al objeto contratado (...)*” y ii) *“en el evento en que no se produzca el pago efectivo del siniestro, continúese ante la COMPAÑÍA DE SEGUROS EL CÓNDOR S. A. con el proceso de reclamación para lograr el pago en dinero de los siniestros amparados con la garantía única constituida por el contratista según pólizas N° 7191811 y 66572”*.

7. El 10 de julio de 2000 Seguros CÓNDOR S.A., a través de su representante legal, presentó proyecto de acuerdo el cual no fue aceptado por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño, ya que no se ajustaba a las necesidades del proyecto.

8. El 3 de septiembre de 2002 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca **libró mandamiento** de pago en favor del Distrito Capital de Bogotá D.C.- Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño, por la suma de \$49'648.578,71 más los intereses previstos en la Ley 80 de 1993, causados desde la fecha de su exigibilidad. Señaló además que el pago debía realizarse en los términos establecidos en el artículo 498 del C.P.C.

9. Respecto de la conformación del título ejecutivo, consideró el Tribunal que el título ejecutivo complejo se originaba en (i) el Contrato N° 36/97, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño del Distrito Capital y el consorcio Raúl Rojas-Fabio Urrea; (ii) las Resoluciones N° 1 de 21 de enero de 2000 y 6 de 30 de mayo de 2000, por medio de las cuales se decidió hacer efectiva la póliza N°

7191811 y se realizó la liquidación unilateral del contrato; (iii) la póliza que garantiza el cumplimiento del contrato 36/97 expedida por la Seguros CÓNDROR S.A.

10. La Compañía de Seguros CÓNDROR S.A. **contestó la demanda** y propuso las siguientes **excepciones**:

1. Ausencia del título ejecutivo: Seguros CÓNDROR S.A. señaló que el título ejecutivo complejo conformado por varios documentos, no fue aportado en original ni en copia auténtica para que fuese tenido como medio probatorio, en aras de *“dar certeza y seguridad jurídica a los títulos provenientes del deudor de los que pueda predicarse mérito ejecutivo”*;
2. Inexistencia de obligación condicional a cargo de la aseguradora por no acreditarse la cuantía de la pérdida: sostuvo la aseguradora que no es posible hacer exigibles las sumas pretendidas en la demanda pues no se demostró el perjuicio causado con el incumplimiento.
3. Proporcionalidad de la pena: sostuvo que la cláusula penal debía reducirse en proporción al porcentaje cumplido y ejecutado de la obra.
4. Falta de jurisdicción: señaló que el contrato de seguro documentado en la póliza no podía tipificarse como un contrato estatal, toda vez que se trataba de un negocio jurídico autónomo e independiente del contrato que garantizaba.

11. El 28 de marzo de 2003 **la entidad ejecutante se opuso a cada una de las excepciones**:

1. Frente a la ausencia de título ejecutivo señaló que los documentos aportados efectivamente conformaban un título ejecutivo complejo que prestaba mérito ejecutivo, de los cuales se desprendía una obligación clara, expresa y actualmente exigible que cumplía con los requisitos señalados en el art. 488 del C.P.C.
2. Respecto a la inexistencia de la obligación condicional, resaltó la ejecutante que la compañía aseguradora asumió y reconoció la obligación en el

momento en que impugnó la Resolución 01 de 2000, que liquidó unilateralmente el contrato de obra 036/97 y presentó fórmula de solución al conflicto en el sentido de *“pagar el riesgo asegurado con la continuación de la obra para culminarla y de esa forma dar cumplimiento al objeto del contrato asegurado”*.

3. En relación con la proporción de la pena, puso de presente que la compañía CÓNDROR S.A. tuvo la oportunidad procesal, por vía gubernativa, de objetar la reclamación presentada y no lo hizo, aunado a que se allanó presentando fórmulas alternativas para atender la obligación.
4. Frente a la falta de jurisdicción señaló que, conforme al artículo 75 de la Ley 80 de 1993, correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de los procesos de ejecución de las obligaciones derivadas del contrato de seguro suscrito por el contratista a favor de entidades públicas contratantes.

12. El 19 de noviembre de 2002 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme con las **medidas cautelares solicitadas**, decretó el embargo del inmueble ubicado en la carrera 7 No. 84-86, edificio Torres 85, consultorio 1-02 perteneciente a la Compañía de Seguros Generales CÓNDROR S.A.; no obstante, la medida cautelar no fue registrada porque sobre el inmueble antes citado se encontraba registrado un embargo vigente ordenado en el trámite de un proceso de cobro coactivo adelantado por la Contraloría General de la República<sup>1</sup>.

13. El 15 de octubre de 2003 el **Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probadas las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante con la ejecución**, presentar la liquidación específica del capital y los intereses y condenó en costas a la compañía ejecutada. El Tribunal respecto de las excepciones consideró:

1. Ausencia de título ejecutivo. De conformidad con los artículos 252, 488 y 497 del C.P.C., en concordancia con el numeral 4 del artículo 68 del C.C.A., el título ejecutivo complejo estaba debidamente conformado y como consecuencia era hábil para proferir el mandamiento de pago.

---

<sup>1</sup> Folio 200-reverso, cuaderno 4.

2. Inexistencia de la obligación. La entidad solo tenía que demostrar la ocurrencia del riesgo asegurado para que se originara la facultad de declarar el siniestro y ordenar su pago a la compañía aseguradora o al contratista. La entidad no tenía la obligación de demostrar la cuantía ya que ella fue establecida en el contrato y la entidad tenía la facultad de imponerla. En todo caso el valor real del perjuicio del incumplimiento se debía debatir dentro de un estudio sobre la legalidad del acto administrativo y no dentro del proceso ejecutivo.
3. Falta de jurisdicción. Conforme al artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y acorde a lo sostenido por esta Corporación, esta era la jurisdicción competente para conocer de las acciones ejecutivas originadas en un contrato estatal.
4. Proporcionalidad de la pena. El acto administrativo cumplió estrictamente lo señalado en la cláusula 18 del contrato, aunado a que la proporcionalidad de la sanción es un asunto que debió debatirse en un proceso distinto al de la referencia.

## **1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia**

14. La Compañía de Seguros Generales CÓNDROR S.A. **apeló la decisión para que se revocara y en su lugar se declarara probada la excepción de ausencia de título ejecutivo propuesta.** Para la demandada, para que se pueda constituir el título ejecutivo complejo se debía aportar copia de la Resolución 02 de 3 de febrero de 1999 que declaró la caducidad del contrato.

15. El actor se opuso a lo resuelto por el Tribunal pues consideró que *“solamente el documento original puede llevar inherente en él el derecho literal que trata de ejercitarse, literalidad que se confunde con el mismo título y que al no aportarse en original o copia auténtica le resta mérito ejecutivo”*.

16. En la etapa procesal para **alegar de conclusión**, las partes guardaron silencio<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Folios 126 del cuaderno principal.



## 2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Jurisdicción – 2.2. Competencia – 2.3. Cuestión previa – 2.4. Caso concreto - 2.5. Sobre la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación - 2.6. Sobre la toma de posesión, liquidación forzosa administrativa y terminación de la existencia legal de CÓNDROR S.A. Compañía de Seguros Generales - 2.7. Sobre la existencia del título ejecutivo – 2.8. Sobre la condena en costas

### 2.1. Jurisdicción

17. El presente asunto es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo en razón del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en un proceso ejecutivo adelantado para hacer efectivos los amparos establecidos en una póliza de seguros constituida para garantizar un contrato estatal<sup>3</sup>.

### 2.2. Competencia

18. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

### 2.3. Cuestión previa

19. En atención a las múltiples actuaciones que se han surtido en el expediente de la referencia, dentro de las que se ha solicitado la terminación del proceso, se ha oficiado y requerido información a diversas entidades, se ha allegado información relevante que impacta la suerte del asunto que se decide, se ha solicitado la nulidad de las actuaciones, y al haberse decretado la nulidad de lo actuado a partir del 5 de diciembre de 2013; la Sala estima fundamental desarrollar, en una cuestión previa, el análisis de las diversas actuaciones con el fin de determinar el estado del proceso:

1. El 4 de febrero de 2004 el representante legal de Seguros CÓNDROR S.A. solicitó la suspensión del proceso y la cancelación de los embargos decretados en virtud de la toma de posesión de los negocios, bienes y

---

<sup>3</sup> Artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

haber de la Aseguradora, ordenada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 1204 de 12 de noviembre de 2003<sup>4</sup>.

2. El 25 de febrero de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la notificación al Agente Especial designado por la Superintendencia Bancaria, la que se surtió el 29 de julio del mismo año mediante aviso, y en la que se le puso de presente que contaba con “tres (3) días para retirar las copias del respectivo traslado”, término en el que el notificado guardó silencio<sup>5</sup>.
3. El Ministerio Público solicitó revocar la decisión del Tribunal y, en su lugar, declarar la nulidad de lo actuado a partir del 4 de febrero de 2004, en virtud de la Resolución 1204 del 12 de noviembre de 2003 dictada por la Superintendencia Bancaria mediante la cual la ejecutada fue objeto de la medida administrativa de toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes. Lo anterior de conformidad con lo establecido por Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 116 literal d) y por la Ley 222 de 1995 artículos 99 y 100<sup>6</sup>.
4. El 31 de marzo de 2006 la parte ejecutada solicitó “la terminación del proceso por pago total de la obligación”. Para el efecto puso de presente que la Contraloría de Bogotá había iniciado el proceso de cobro coactivo No. 1801 contra el consorcio integrado por Raúl Eduardo Rojas y Fabio Ernesto Urrea Uyabán y contra Seguros CÓNDROR S.A., por el incumplimiento del contrato de obra 36 de 1997, que se encontraba amparado con la póliza de seguro de cumplimiento No. 7191811. Como consecuencia, el 31 de agosto de 2004 libró mandamiento ejecutivo contra la aseguradora CÓNDROR S.A. por valor de \$25'362.027,60, más los intereses legales que se llegaren a causar<sup>7</sup>.
5. Señaló Seguros CÓNDROR S.A. que los días 30 de agosto y 14 de diciembre de 2005 había cancelado al Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño la suma de \$32'565.243. Por lo anterior la Contraloría de Bogotá resolvió: i) reconocer el pago efectuado por CÓNDROR S.A., por concepto de la obligación a su cargo; ii) decretar terminado el proceso No. 1801 de

---

<sup>4</sup> Folio 14 del cuaderno principal.

<sup>5</sup> Folios 18 y 19 del cuaderno principal.

<sup>6</sup> Folios 117–125 del cuaderno principal.

<sup>7</sup> Folios 139 y 140 del cuaderno principal.

cobro coactivo en lo atinente a CÓNDROR S.A., en su calidad de garante, por pago total de la obligación a su cargo, iii) continuar el trámite del proceso en contra del consorcio integrado por Raúl Eduardo Rojas y Fabio Ernesto Urrea Uyabán<sup>8</sup>.

6. El 29 de enero de 2015, mediante auto de mejor proveer, la Sección Tercera, Subsección B (conformada por los Magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth -el Magistrado Ramiro Pazos Guerrero manifestó su impedimento por haber conocido del proceso en su calidad de Magistrado del Tribunal de primera instancia, el cual fue aceptado mediante Auto de 18 de junio de 2014-) ofició a la Superintendencia de Sociedades para que informara sobre el estado de la medida administrativa de toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de Seguros CÓNDROR S.A.<sup>9</sup>.
7. Mediante Auto de 7 de octubre de 2015 el Magistrado Danilo Rojas Betancourth dispuso que por Secretaría de la Sección se requiriera a la Superintendencia Financiera de Colombia para que informara sobre el estado de la medida administrativa de toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de Seguros CÓNDROR S.A.<sup>10</sup>.
8. En respuesta a la solicitud, la Superintendencia Financiera de Colombia puso de presente que, si bien, mediante Resolución N° 1677 de 6 de octubre de 2004 resolvió levantar la medida de toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de CÓNDROR S.A.; mediante la Resolución 2211 de 5 de diciembre de 2013, se ordenó la liquidación forzosa administrativa de Seguros CÓNDROR S.A., ya que la aseguradora “no cumplía con los requisitos de capital mínimo y fondo de garantía exigidos por la regulación financiera”. Al mismo tiempo, puso de presente que para cualquier información se debía requerir al liquidador de la compañía<sup>11</sup>.
9. Mediante Auto de 27 de marzo de 2017 el Magistrado Ponente, Danilo Rojas Betancourth, resolvió declarar de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir del 05 de diciembre de 2013, fecha en la que se ordenó la

---

<sup>8</sup> Folios 146-147 del cuaderno principal.

<sup>9</sup> Folio 243 del cuaderno principal.

<sup>10</sup> Folio 253 del cuaderno principal.

<sup>11</sup> Folios 256-261 del cuaderno principal.

liquidación forzosa administrativa de Seguros CÓNDROR S.A., al observar que:

- a. El 4 de febrero de 2004 la sociedad ejecutada solicitó la suspensión del proceso y la cancelación de los embargos decretados por haber entrado en un proceso de toma de posesión por parte de la Superintendencia Bancaria.
  - b. El 25 de febrero de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que se comunicara la existencia del proceso al liquidador designado, sin embargo, no obra en el expediente pronunciamiento alguno de su parte.
  - c. Ante el impedimento manifestado por el entonces ponente, y cuando el asunto se encontraba en el despacho para fallo, se advirtió que no se había resuelto la solicitud de nulidad formulada por el Ministerio Público.
  - d. La comunicación de la Superintendencia Financiera, en la que se informó de la liquidación forzosa administrativa de Seguros CÓNDROR S.A., por no cumplir con los requisitos de capital mínimos exigidos por la regulación financiera.
  - e. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, *“los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite (...) y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso”*, además de señalar que el Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravención a lo allí prescrito<sup>12</sup>.
10. El Auto de 27 de marzo de 2017, que declaró de oficio la nulidad de lo actuado, ordenó remitir el expediente al liquidador designado por la Superintendencia Financiera de Colombia para CÓNDROR S.A. Compañía de Seguros, Mauricio Castro Forero<sup>13</sup>.
11. El 12 de julio de 2017 la Superintendencia Financiera informó que, una vez surtido el trámite del proceso de liquidación, el Liquidador de CÓNDROR S.A. declaró la terminación de la existencia legal de la entidad mediante la

---

<sup>12</sup> Folios 280-282 del cuaderno principal.

<sup>13</sup> Folio 282 del cuaderno principal.

Resolución N° 269 de 4 de mayo de 2016 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de mayo de 2016. Señaló además que el Liquidador celebró un contrato de fiducia mercantil de administración y pago de remanentes N° FID-0087 de 2015 con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria FIDUAGRARIA S.A.<sup>14</sup>.

12. El 7 de noviembre de 2017 FIDUAGRARIA S.A. informó a esta Corporación que, una vez agotadas cada una de las etapas del proceso liquidatorio, *“particularmente lo relacionado al término para presentar reclamaciones, el cual inició el 27 de diciembre de 2013 y finalizó el 27 de enero de 2014”*, se declaró la terminación de la existencia legal de CÓNDOR S.A., y que dentro del término para presentar reclamaciones *“la entidad demandante, al parecer no concurrió a presentar su reclamación”*<sup>15</sup>.
13. Se indicó que ni FIDUAGRARIA S.A., ni el Patrimonio Autónomo de Remanentes y Contingencias CÓNDOR S.A., ostentan la calidad de continuadores del proceso liquidatorio de la extinta entidad, cesionarios, sustitutos procesales, avalistas o subrogatorios de sus obligaciones<sup>16</sup>.
14. Mediante Auto de 6 de noviembre de 2018 la Sección Tercera, Subsección B, decretó como prueba de oficio el Auto 8 de 15 de febrero de 2006, proferido por la Contraloría Distrital –Subdirección de Jurisdicción Coactiva; recibos de pago expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda- Dirección Distrital de Tesorería y los remitidos por la FIDUAGRARIA relacionados con la liquidación de la Compañía Aseguradora Cóndor S.A.; auto del cual se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público<sup>17</sup>.
15. Mediante comunicación remitida a esta Corporación el 21 de noviembre de 2018, Luz Stella Boada Ordoñez, apoderada de la demandante, informó que *“pese a los ingentes esfuerzos realizados por el personal de archivo de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, el expediente correspondiente al proceso referido, no fue encontrado”*<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Folio 298 del cuaderno principal.

<sup>15</sup> Folios 299 y 300 del cuaderno principal.

<sup>16</sup> Folio 300 del cuaderno principal.

<sup>17</sup> Folio 302 del cuaderno principal.

<sup>18</sup> Folio 303 del cuaderno principal.

#### **2.4. Caso concreto**

20. La Compañía de Seguros CÓNDROR S.A. impugnó la Sentencia de primera instancia de 15 de octubre de 2003, que ordenó seguir adelante con la ejecución, con fundamento en la ausencia de título ejecutivo. En la sustentación del recurso alegó que el título ejecutivo complejo debía estar constituido, además de los documentos aportados por la demandante, por la Resolución 2 de 3 de febrero de 1999 que declaró la caducidad del contrato.

21. La Compañía de Seguros CÓNDROR S.A. solicitó, además, “la terminación del proceso por pago total de la obligación”, con fundamento en que la Contraloría de Bogotá había iniciado el proceso de cobro coactivo No. 1801 contra el consorcio integrado por Raúl Eduardo Rojas y Fabio Ernesto Urrea Uyabán y contra Seguros CÓNDROR S.A., por incumplimiento del contrato de obra 36 de 1997, mismo que la Contraloría declaró terminado en lo atinente a CÓNDROR S.A. por haberse efectuado el pago total de la obligación.

#### **2.5. Sobre la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación**

22. Ante la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación presentada por la ejecutada, que pretende se realice en los términos establecidos el artículo 537 del C. de P.C., esta Sala, previo a continuar con el estudio de la apelación, se pronunciará sobre esa petición:

23. Según obra en el expediente, luego de adelantar un proceso de cobro coactivo contra el consorcio integrado por los señores Raúl Eduardo Rojas Borbón y Fabio Ernesto Urrea Uyabán y contra la compañía de seguros CÓNDROR S.A., la Contraloría de Bogotá resolvió reconocer el pago efectuado por CÓNDROR S.A., Compañía de Seguros, por valor de 32.565,224 por concepto de la obligación a su cargo.

24. Para el efecto, la compañía de Seguros CÓNDROR S.A. allegó copia de los pagos efectuados ante el Distrito de Bogotá-Dirección Distrital de Tesorería, así:

- Un primer pago por la suma de \$32.409.008.00<sup>19</sup>.
- Un segundo pago por la suma de \$152.064.00<sup>20</sup>.

25. Allegó además copia del Auto 8<sup>21</sup> de 15 de febrero de 2006, mediante el cual la Contraloría Distrital – Subdirección de Jurisdicción Coactiva, teniendo en cuenta los pagos antes señalados y trascritos, resolvió (se transcribe):

**“ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer el pago efectuado por **CÓNDOR S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, con NIT 890300465-8, por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$32.565.224)**, por concepto de la obligación a su cargo.

**“ARTÍCULO SEGUNDO:** Decretar terminado el proceso N° 1801 de cobro coactivo en lo atinente a **CÓNDOR S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, en su calidad de garante, por pago total de la obligación a su cargo.

**“ARTÍCULO TERCERO:** Continuar el trámite del proceso en contra del consorcio integrado por los señores **RAÚL EDUARDO ROJAS BORBÓN** y **FABIO ERNESTO URREA UYABÁN**, representado por el señor **RAÚL EDUARDO ROJAS BORBÓN**, o quien haga sus veces en los términos del Mandamiento de Pago.

**“ARTÍCULO CUARTO:** Notificar el presente auto conforme a lo ordenado por el artículo 321 del C.P.C.” (Énfasis original).

26. Para la Contraloría Distrital, como se encontraban satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, procedía la terminación del proceso coactivo respecto de la aseguradora ejecutada y ii) el cobro coactivo continuaba con la ejecución en contra del consorcio integrado por los señores Raúl Eduardo Rojas Borbón y Fabio Ernesto Urrea Uyabán (no demandados en el presente proceso), en los términos del mandamiento de pago.

27. La Sala observa la identidad entre lo pagado por la aseguradora CÓNDOR S.A. en el proceso de cobro coactivo y lo reclamado en el proceso ejecutivo de la referencia, en particular, cuando en el expediente se ha acreditado que los pagos correspondientes se hicieron a nombre del actor, Distrito de Bogotá-Dirección Distrital de Tesorería.

---

<sup>19</sup> Folio 147 del cuaderno principal.

<sup>20</sup> Folio 146 del cuaderno principal.

<sup>21</sup> Folios 141-144 del cuaderno principal.

28. La Resolución No. 6 de 30 de mayo de 2000, que resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución 1 de 2000, mediante la cual el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño liquidó el contrato de obra 36 de 1997, estableció que, de los \$49.648.578.71 que debían ser pagados como resultado de la liquidación unilateral del contrato, \$25'362.027,60, correspondían al monto de la cláusula penal como consecuencia del incumplimiento, tal y como se pactó en la cláusula 18 del contrato de obra pública<sup>22</sup>; cumplimiento que se encontraba amparado por la póliza No. 7191811 expedida por la aseguradora CÓNDROR S.A.

29. El valor que la ejecutada, aseguradora CÓNDROR S.A., pagó a la entidad ejecutante en el marco del proceso de cobro coactivo No. 1801 adelantado por la Contraloría Distrital de Bogotá, corresponde a parte del valor asegurado, \$25'362.027,60, más los intereses legales.

30. De acuerdo con lo expuesto se concluye que, de la suma de “\$49'648.578,71 más los intereses legales”, por la que el Tribunal de primera instancia libró el mandamiento de pago, la aseguradora CÓNDROR S.A. pagó al Distrito Capital-Dirección Distrital de Tesorería un total de 32'565.224, de conformidad con lo resuelto por la Contraloría Distrital en el trámite del proceso de cobro coactivo No. 1801, por tanto ha operado un pago parcial de la obligación.

## **2.6. Sobre la toma de posesión, liquidación forzosa administrativa y terminación de la existencia legal de Cónдор S.A. Compañía de Seguros Generales**

31. Como se señaló en el apartado sobre cuestiones previas, el 4 de febrero de 2004 la ejecutada solicitó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspensión del proceso y la cancelación de los embargos decretados como resultado de la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la aseguradora ordenada por la Superintendencia Bancaria mediante la Resolución N° 1204 de 12 de noviembre de 2004.

32. No obstante haberse ordenado la notificación al Agente Especial designado, no obra en el expediente ningún pronunciamiento de su parte.

---

<sup>22</sup> Folios 114 del cuaderno 4.



33. Al indagar por el estado del proceso de toma de posesión se informó a esta Corporación que, si bien, con respecto a proceso iniciado en el año 2004 la Superintendencia Bancaria había decidido levantar la medida de toma de posesión, mediante Resolución N° 2211 de 5 de diciembre de 2013 la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación forzosa administrativa de Seguros CÓNDR S.A.<sup>23</sup>.

34. La nueva medida de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios ordenada por la Superintendencia Financiera mediante Resolución N° 1482 de 5 de agosto de 2013, se dio a conocer al público mediante la fijación en la puerta de las oficinas del domicilio principal y las sucursales de la compañía, medida que fue publicada en un diario de amplia circulación nacional por primera vez el 12 de diciembre de 2013 en el diario La República, por segunda vez el 27 de diciembre de 2013 en el diario El Tiempo, e incluso se divulgó el emplazamiento de CÓNDR S.A., en un comercial de 38 segundos de duración en el noticiero CM& por la cadena de televisión Canal Uno. El liquidador, en publicación en el diario El Espectador de 23 de enero de 2014, recordó el término y lugares para presentar las reclamaciones oportunas.

35. Al no superar la situación que dio origen a la toma de posesión decretada el 5 de agosto de 2013, mediante Resolución N° 2211 de 05 de diciembre de 2013 se ordenó la liquidación forzosa administrativa de CÓNDR S.A., medida sobre la que se publicó un comunicado de prensa “ABC CÓNDR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES”, en el que se le informó al público cómo debía de proceder ante la liquidación forzosa. En la misma resolución se señaló “**que todos los inversionistas y acreedores incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la liquidación forzosa administrativa, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la intervenida deberán hacerlo dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa y de conformidad con las normas que lo rigen**”<sup>24</sup> (énfasis fuera de texto).

36. Durante el desarrollo del proceso de liquidación forzosa administrativa, tal y como se mencionó en el apartado de cuestiones previas, los interesados debieron presentar sus reclamaciones dentro del término establecido para ello, esto es,

---

<sup>23</sup> Folios 256-257 del cuaderno principal.

<sup>24</sup> Folios 258-261 del cuaderno principal.

desde el 27 de diciembre de 2013 al 27 de enero de 2014; no obstante, tal y como lo señala FIDUAGRARIA, la demandante no concurrió a presentar su correspondiente reclamación<sup>25</sup>.

37. Con posterioridad a la declaratoria de liquidación forzosa administrativa, mediante Resolución N<sup>o</sup> 269 del 04 de mayo de 2016, se declaró la terminación de la existencia legal de CÓNDOR S.A. Compañía de Seguros Generales, acto que fue igualmente publicado en un diario de amplia circulación nacional el 04 de mayo de 2016<sup>26</sup>.

38. Se observa entonces que, no obstante que se realizaron los emplazamientos respectivos contemplados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 2555 del 2010, la demandante en el presente proceso ejecutivo no cumplió su carga de acudir al proceso de liquidación para perseguir su acreencia<sup>27</sup>.

39. De conformidad con la norma especial, Decreto 2555 de 2010, vencido el término para presentar las reclamaciones, los interesados tenían un término adicional de 5 días hábiles para objetar las reclamaciones presentadas. No obstante, no obra en el expediente que, en alguna de las oportunidades previstas por las normas especiales<sup>28</sup>, la ejecutante, frente a los múltiples emplazamientos que tuvieron lugar, haya actuado conforme a sus deberes y cargas de actuación.

## **2.7. Sobre la existencia del título ejecutivo**

40. Tanto en las excepciones propuestas por la ejecutada luego de corrido el traslado del mandamiento de pago, como en la impugnación del fallo de primera instancia, se alegó la inexistencia del título ejecutivo; por ello, la Sala encuentra que para resolver la impugnación debe realizarse un análisis sobre existencia del título ejecutivo complejo con el cual se pretende la ejecución.

---

<sup>25</sup> Folios 285 y 286.

<sup>26</sup> Folios 285 y 286.

<sup>27</sup> Artículos 9.1.3.2.1 y 9.1.3.2.2. del Decreto 2555 de 2010.

<sup>28</sup> Regulación a la que se suma el artículo 48 n<sup>o</sup> 5 de Ley 1116 de 2006 "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones", que establece un plazo de 20 días a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que los acreedores presenten su crédito al liquidador.

41. Para garantizar el contrato de obra pública No. 36 de 29 de diciembre de 1997<sup>29</sup>, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño y el consorcio Raúl Rojas y Fabio Urrea, el consorcio constituyó la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 7191811 expedida por la Compañía de Seguros Generales CÓNDOR S.A.

42. Se aportó al proceso el original de la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 7191811 expedida por la Compañía de Seguros Generales CÓNDOR S.A., en la que figura como: *“Asegurado/Beneficiario: Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño; Tomador/Afianzado: Consorcio Raúl Rojas Borbón y Fabio Urrea Uyabán”*<sup>30</sup>.

43. De igual manera obran en el expediente la Resolución 1 de 2000 que liquidó unilateralmente el contrato<sup>31</sup> y la Resolución 6 de 2000 por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1 de 2000 que liquidó unilateralmente el contrato<sup>32</sup>.

44. El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil<sup>33</sup> contempla que podrán demandarse ejecutivamente obligaciones expresas, claras y exigibles que provengan del deudor<sup>34</sup>. Sobre la existencia del título ejecutivo complejo en materia de contratación estatal, se debe observar el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone el mérito ejecutivo para las garantías y demás documentos que provengan del deudor, así:

*ARTICULO 68. DEFINICIÓN DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL ESTADO QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO.* Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:

(...)

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

---

<sup>29</sup> Que se aportó al proceso en folios 106-116 del cuaderno 4.

<sup>30</sup> Folio 105 del cuaderno 4.

<sup>31</sup> Folios 117-129 del cuaderno 4.

<sup>32</sup> Folios 149-172.

<sup>33</sup> Artículo 422 del Código General del Proceso.

<sup>34</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de octubre de 2004, exp. 23989.

45. Así, para el momento de proferirse la sentencia de primera instancia que se impugnó, tal y como lo reconoció el Tribunal, el título se encontraba “*debidamente conformado mediante la póliza de cumplimiento expedida por la Compañía de Seguros Cóndor S.A., las resoluciones Nos. 001/00 y 06/00 por medio de las cuales se resolvió hacer efectiva la póliza N° 719811 y realizó la liquidación unilateral del contrato y, por el contrato de obra N° 036/97*”.

46. Ahora bien, con posterioridad a la Sentencia de primera instancia, ha tenido lugar un número considerable de hechos sobrevinientes consistentes en la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios; la liquidación forzosa administrativa y la terminación de la existencia legal de la Compañía de Seguros CÓNDROR S.A., que sin lugar a dudas han tenido un efecto directo sobre el proceso de la referencia.

47. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra, dentro de los efectos de la toma de posesión, la suspensión de los procesos de ejecución en curso, la imposibilidad de admitir nuevos procesos y la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión. En similar sentido la Ley 1116 de 2006, en su artículo 20, consagra la imposibilidad de admitir o continuar procesos de ejecución, así como la obligación del juez de declarar de oficio la nulidad de las actuaciones que contravengan la señalada imposibilidad<sup>35</sup>. Asimismo, el Decreto 2555 de 2010, que recoge las normas del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, establece, dentro de las medidas preventivas obligatorias del resultado de la toma de posesión, la suspensión de los procesos de ejecución.

48. El Decreto 2555 de 2010, artículo 9.1.3.1.1<sup>36</sup>, en concordancia con el artículo 117 literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero<sup>37</sup>, establecen además,

---

<sup>35</sup> Tal y como ocurrió en el proceso de la referencia y fue declarado en Auto de 27 de marzo de 2017, por parte del Consejero Ponente, Danilo Rojas Betancourth, folios 280-282 del cuaderno principal.

<sup>36</sup> “**Artículo 9.1.3.1.1 (Artículo 16 Decreto 2211 de 2004). Contenido del acto que ordene la liquidación forzosa administrativa.**

El acto administrativo por el cual la Superintendencia Financiera de Colombia ordene la liquidación forzosa administrativa de una institución financiera vigilada, tendrá los efectos previstos en el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y deberá disponer, además de las medidas previstas en el artículo 9.1.1.1.1 del presente decreto, las siguientes:

a) La advertencia de que todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida son exigibles a partir de la fecha en que se adoptó la medida de liquidación forzosa

como medida derivada del acto administrativo que ordene la liquidación forzosa administrativa para el caso de las aseguradoras, la **terminación automática**, al vencimiento de un plazo de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de los contratos de seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, salvo cuando se trate de seguros de cumplimiento o de vida, para los cuales el término podrá ampliarse hasta por 6 meses.

49. Como se observa, de la mano de la suspensión de los procesos de ejecución, de la obligación de decretar de oficio la nulidad de las actuaciones surtidas en

---

administrativa, sin perjuicio de lo que dispongan las normas que regulan las operaciones de futuros, opciones y otros derivados, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

b) En el caso de aseguradoras, la advertencia acerca de la terminación automática al vencimiento de un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de los contratos de seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, salvo cuando se trate de seguros de cumplimiento o de vida, evento en el cual el plazo podrá ser ampliado hasta en seis (6) meses;

c) La advertencia de que el pago efectivo de las condenas provenientes de sentencias en firme contra la entidad intervenida proferidas durante la toma de posesión se hará atendiendo la prelación de créditos establecidos en la ley y de acuerdo con las disponibilidades de la entidad;

d) La comunicación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para que retire las calidades de agentes retenedores y autorretenedores de los impuestos administrados por dicha entidad.

Parágrafo. Cuando en el mismo acto de toma de posesión se disponga la liquidación, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1 del presente decreto y las menciones hechas al agente especial en dicho artículo, se entenderán hechas al liquidador”.

<sup>37</sup> **“Artículo 117. Liquidación como consecuencia de la toma de posesión.** <Artículo modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:>

Liquidación como consecuencia de la toma de posesión

1. La decisión de liquidar la entidad implicará, además de los efectos propios de la toma de posesión, los siguientes:

a) La disolución de la entidad;

b) La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida, sean comerciales o civiles, estén o no caucionadas, lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan las normas que regulen las operaciones de futuros, opciones y otros derivados;

c) La formación de la masa de bienes;

d) La terminación automática al vencimiento de un plazo de dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, de los contratos de seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, celebrados por una entidad aseguradora respecto de la cual la Superintendencia Bancaria disponga la liquidación. La Superintendencia Bancaria podrá ampliar este plazo hasta en seis meses en el caso de seguros de cumplimiento y de vida. En el acto administrativo que ordene la liquidación de una entidad aseguradora se advertirá la consecuencia de la terminación automática antes mencionada. Lo anterior salvo que la entidad objeto de la toma de posesión ceda los contratos correspondientes, lo cual deberá hacerse en todo caso cuando se trate de contratos de seguros que otorguen las coberturas de la seguridad social previstas en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto-ley 1295 de 1994 y los de seguros obligatorios de accidentes de tránsito. Para este efecto se tendrán en cuenta las reservas matemáticas correspondientes que constituyen ahorro previsional del asegurado y si es del caso los derechos derivados de la garantía de la Nación, de conformidad con la Ley 100 de 1993;

e) Los derechos laborales de los trabajadores gozarán de la correspondiente protección legal, en los procesos de liquidación.

(...)”

contravención de esta obligación, procede, de igual manera, por disposición legal especial, la terminación automática de los contratos de seguro en un término de dos meses como regla general, y de seis meses para los contratos de seguros de cumplimiento, como es el caso del contrato de seguro que en el proceso de la referencia conformaba el título ejecutivo que dio origen al proceso ejecutivo; terminación a la que, por demás, se refiere el artículo 4 de la Resolución 221 de 2013 por la cual se ordenó la liquidación forzosa.

50. Advierte la Sala que al operar la terminación automática por disposición legal especial de un contrato de seguro de cumplimiento, desaparece con ello el título ejecutivo complejo que da origen y permite la ejecución.

51. En el presente caso el acto administrativo que ordenó la liquidación forzosa administrativa fue la Resolución 2211 de 5 de diciembre 2013<sup>38</sup>, resolución contra la que procedía el recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación y que adquirió firmeza el 20 de diciembre de 2013. Lo anterior implica que el plazo a partir del cual se debe iniciar el conteo para que se produzca la señalada terminación automática de los 6 meses en los contratos de seguro de cumplimiento, es al día siguiente de la firmeza del acto administrativo, esto es, el 21 de diciembre de 2013, terminación automática que finalmente ocurrió el 24 de junio de 2014<sup>39</sup>.

52. Advierte la Sala que, dado que para el momento en que se decide en segunda instancia el proceso ejecutivo de la referencia, ha operado la terminación automática del contrato de seguro de cumplimiento, ha desaparecido consecuentemente el título ejecutivo complejo que da origen al presente proceso.

53. Respecto a la regulación del Código de Procedimiento Civil frente a los procesos de ejecución, a la que se debe acudir por remisión expresa del Código Contencioso Administrativo en sus artículos 87 y 252; el Código de Procedimiento Civil, artículo 510, señala que *“si al dictar sentencia prospera alguna excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez se abstendrá de fallar sobre*

---

<sup>38</sup> Folios 258-261 del cuaderno principal.

<sup>39</sup> Ley 4 de 1913. Artículo 62. “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”

*las demás*". Así, dado que en el caso en estudio ha prosperado la excepción de mérito consistente en la falta de título ejecutivo complejo producto de la terminación automática del contrato de seguro, así se resolverá y se ordenará no continuar con la ejecución.

54. Finalmente, frente a la existencia del pago parcial referido en el apartado 4, si bien es verdad que al haber operado la excepción de mérito de ausencia del título ejecutivo, "el juez se abstendrá de fallar sobre las demás"; en esta parte motiva la Sala considera de recibo, para efectos de claridad, recordar que dicho pago parcial en todo caso se realizó<sup>40</sup> antes de que operara la señalada terminación automática del contrato de seguro y de que se verificara consecuentemente la falta de existencia el título ejecutivo.

## **2.8. Sobre la condena en costas**

55. El Código Contencioso Administrativo, en su artículo 171, señala que el juez podrá condenar en costas a la parte vencida en el proceso en los términos del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, la condena en costas en el Código de Procedimiento Civil está contenida, de manera general, en su artículo 392, que señala que habrá lugar a condenar en costas a la parte vencida cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Sobre los procesos ejecutivos el Estatuto Procesal Civil referido contempla, además, dos disposiciones puntuales sobre la condena en costas al ejecutado (artículo 507) o al ejecutante (artículo 510), de acuerdo con la parte que ha sido vencida en el proceso.

Ahora, si bien las disposiciones anteriores indicarían una eventual condena en costas a la parte vencida, la Sala se abstendrá de hacerlo pues en el caso en estudio estas se decretarían en favor de una persona jurídica frente a la cual se ha declarado la terminación de su existencia legal, razón que, de igual manera, llevará a la Sala a revocar la condena en costas de primera instancia a cargo del demandado.

---

<sup>40</sup> Tal y como se evidencia en el apartado 4 del presente fallo.

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia proferida el 15 de octubre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

**SEGUNDO: DECLARAR** probada la excepción de mérito de ausencia del título ejecutivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva y **NEGAR** seguir adelante con la ejecución.

**TERCERO:** no condenar en costas.

**CUARTO:** por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, **DEVUÉLVASE** el expediente al Tribunal de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**MARÍA ADRIANA MARÍN (E)**

**ALBERTO MONTAÑA PLATA**